



## 5. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CARMONA

### **Contratos de participación público privada.**

Tengo que confesar que cuando escuché por primera vez la mención de este proyecto como PPP me sorprendí y me alarmé pensando que probablemente, por una cuestión que se llama parónimo palabras que suenan similares pero se escriben diferente y su significado es otro, estábamos hablando de una iniciativa para arrancar con el TPP, el Tratado del Transpacífico. Y tuve una pasajera tranquilidad después de enterarme de que se trataba de un proyecto vinculado con las contrataciones públicas, particularmente con inversiones en obras públicas.

El problema se presentó cuando en el bloque del Frente para la Victoria PJ comenzamos el estudio de este tema. Surgieron algunos elementos que me llevaron a considerar que las similitudes no eran solamente de sonido de las palabras, sino de los contenidos.

Quiero muy brevemente compartir con ustedes lo que dice el gobierno de la hermana República de Chile sobre el Tratado de Transpacífico que Chile ha suscripto, que está en debate en el Congreso nacional chileno en el capítulo de contrataciones públicas. Esta es la versión del gobierno de Chile. Por lo tanto, es una mirada amigable con el tratado que han suscripto.

Leo lo que dice: “¿Qué oportunidades ofrece el capítulo de Contratación Pública? Este capítulo se propone abrir de forma justa y transparente los mercados de contratación pública de los distintos miembros del TPP, garantizando la competencia entre los agentes económicos locales y extranjeros. Cubre todas las contrataciones de bienes, servicios y construcción, incluidos los contratos de concesión de obras públicas realizadas por las entidades del Estado, que se encuentran listadas en los Anexos del Capítulo.

“Con el TPP, Chile extenderá estas disciplinas a tres nuevos mercados: Perú, Vietnam y Malasia, ya que los TLC con estos países no abarcan esta área. De esta forma, nuestros exportadores obtienen acceso a nuevos mercados de contratación pública: Vietnam con un mercado de...”, y da detalles de los casos.

Continúa: “El principio central de este capítulo es el otorgamiento de Trato Nacional y No Discriminatorio a los proveedores provenientes de los otros miembros del TPP en los procesos de contratación pública, siempre y cuando la licitación pública cumpla con las condiciones establecidas en el capítulo. Al mismo tiempo, contempla exclusiones generales en virtud de la protección de la vida, salud, seguridad y propiedad intelectual. “Entre los aspectos novedosos del Capítulo se pueden mencionar las cláusulas incluidas para facilitar la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en los procesos de contratación pública de las respectivas Partes. Esto permitirá ayudar a internacionalizar las MIPYMES en los mercados de contratación pública. De esta forma, se espera establecer mecanismos, como acceso a la información, gratuidad de documentación y recepción por medios electrónicos, todo lo cual permitirá otorgar mayores oportunidades, a las empresas de menor tamaño, para acceder a los mercados de Contratación Pública de los socios TPP. Asimismo, en relación a las PYMES, los



## Dirección de Información Parlamentaria

países conservaron la posibilidad de otorgar un tratamiento preferencial para sus PYMES en la adjudicación de licitaciones públicas.”

No es casual que las palabras que utiliza el gobierno de la hermana República de Chile para describir al Tratado de Transpacífico que ha suscripto se repitan en este proyecto de ley que estamos tratando. La apelación a la transparencia, a las condiciones justas, a la no discriminación, a la protección de las pymes con la promesa de que las pymes chilenas van a poder competir en otros mercados en contrataciones públicas, son promesas que no nos ofrece este proyecto de ley. Tenemos que decirlo. Son promesas que probablemente nos empiecen a presentar como espejitos de colores pronto cuando nos blanqueen lo que ya está ocurriendo, lo que tímidamente algunos funcionarios se animan a reconocer: que están avanzando en el proceso de negociación de tratados de libre comercio. Se trata de varios a la vez.

¿Sabe qué pasa, señor presidente? Con esta iniciativa alentada por diputados del oficialismo, el Poder Ejecutivo está creando condiciones.

Las condiciones que plantea este proyecto de ley por el que se prevé este sistema de PPP, son las mismas que exigen los estados poderosos del mundo para incorporar a los países periféricos en esos tratados de libre comercio repletos de promesas futuras. Estos tratados preñan la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de industria en los estados de nuestra región y de otras.

El problema es que nosotros no somos la República de Chile, un país que desde hace muchos años por decisión soberana de sus gobiernos aunque probablemente con condicionamientos- aplica políticas de apertura económica, comercial y financiera, así como políticas de mercado que han llevado a que tenga una bajísima o prácticamente nula industrialización.

Ese camino es el que eligió Chile, pero no es el que elegimos los argentinos cuando hablamos de industria nacional y de proteger a nuestras pymes, no solamente a las de producción agropecuaria sino también a nuestras pymes industriales. Esa no es la Argentina que queremos. No queremos que nuestro país se vea arrasado por condiciones de introducción de empresas transnacionales que barran con la capacidad productiva que, con muchísimo esfuerzo, hemos llevado adelante los argentinos.

Soy parte de una fuerza política que se identifica orgullosamente como industrialista, pero quiero señalar que ni siquiera el oficialismo se animaría a bregar por una Argentina solamente agroexportadora. Escucho a los diputados y a los funcionarios del Poder Ejecutivo cuando en sus tímidas intervenciones -al hablar de la industria- no se animan a ir más allá.

Con esto que están haciendo, sin lugar a dudas están yendo más allá. A pesar de los arreglos que se han intentado hacer al texto en este espíritu constructivo que sobrevuela la Cámara, se están llevando puestas las posibilidades de nuestras pymes, lo que implica que a la larga se vean amenazadas y afectadas.

La promesa de que las pymes argentinas se van a poder internacionalizar en algún momento -que seguramente vendrá también con la negociación de los tratados de libre comercio- es otra falsa promesa. ¿Qué competencia pueden sostener nuestras micro, pequeñas y medianas empresas contra las transnacionales que demuestran arrasarse con mercados enteros, incluso con empresas de gran porte en otros países?

En su negociación con la Unión Europea por el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos se ha resistido a discutir el capítulo acerca de las contrataciones públicas.



#### Dirección de Información Parlamentaria

Estados Unidos, país proteccionista que proclama el libre cambio para los demás, está defendiendo de esa manera sus intereses. Nosotros proponemos defender nuestros intereses.

Quiero terminar diciendo que me equivoqué antes cuando dije que se trataba de un parónimo; es más, ni siquiera se trata de un homónimo. Estamos ante un sinónimo: PPP –que es la participación público-privada- es TPP, ya que tiene la filosofía de los tratados de libre comercio que impregnan en este momento los despachos gubernamentales del gobierno nacional y que expresan los legisladores oficialistas, en coherencia con las propias declaraciones del presidente ante la Embajada de los Estados Unidos hace unos años.

Aceptamos que este gobierno sea promercado y proempresas, pero nos cuesta mucho entender que fuerzas de la oposición que sostienen un claro discurso y una práctica industrialista –como en muchos casos me consta- accedan a aprobar esta iniciativa, con la sugerencia de propuestas que va en contra de los intereses nacionales y de las posibilidades de desarrollo nacional a futuro.

## 20. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ROSSI

### **Contratos de participación público privada.**

Este proyecto de ley que nos disponemos a debatir sobre un nuevo régimen de Participación Público Privada (PPP), es una herramienta jurídica con la intención de paliar el déficit de infraestructura del país y generar mayor participación de bancos y organismos multilaterales de crédito en la financiación de la obra pública.

Sin lugar a dudas una manera seria de propiciar que arriben al país los fondos que se necesitan para la envergadura de la empresa que se acomete, es brindar las garantías que otorgan cobertura suficiente al sector privado frente a los habituales riesgos ajenos al mismo que trastocan la ecuación económico-financiera del contrato y que tornan el financiamiento más costoso o directamente imposible. Hemos tenido tantas experiencias desfavorables que no quitan el sueño a los ciudadanos como ha dicho algún colega preopinante, dado que tienen preocupaciones mucho más acuciante como por ejemplo llegar a fin de mes con salarios que han perdido el valor por el abuso que se cometió con el aumento de precios, pero que sí merecen nuestra atenta mirada para evitar caer nuevamente en los mismos errores, aquellos que nos han llevado a endeudarnos en forma ilimitada y sin control sobre las obras en construcción.

Se confía que a través de esta medida se propicie la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarias para el desarrollo de una actividad económica sustentable que fomente el empleo pleno.

La falta de inversión en la Argentina es tan notoria como la necesidad de capital, tecnología, gestión y recursos para satisfacer esa falta, que ni el sector público ni el sector privado pueden, por sí solos, brindar una respuesta adecuada.

Es necesario entonces fomentar nuevas manera los argentinos.

Esto es lo que se pretende ¿Se logrará?



#### Dirección de Información Parlamentaria

Por supuesto que debemos tener esperanza pero lamentablemente nuestro país tiene muy mala fama en relación al permanente cambio de las reglas de juego, ello sumado a que la confiabilidad en la Argentina está por el suelo.

Algunos de los temas incluidos en el proyecto preocupan a los entendidos: la jurisdicción a las que deberemos someternos, las garantías, la situación de las Pymes y todo lo concerniente al Medio Ambiente.

Sabemos que la PPP, nacida en el Reino Unido a principios de los '70 (Private Public Partnerships) y luego expandida por el resto de Europa, América del Norte y Latinoamérica -contando con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, entre sus exponentes más destacados-, representan una nueva forma de vinculación entre el sector privado y el sector público. Bajo este modelo, parte de los servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por el sector privado mediante un contrato en el que están claramente delineados los objetivos compartidos y las obligaciones y riesgos asumidos por cada parte. Pero este plan propuesto por el Ejecutivo es relativamente breve y en algunos aspectos poco claro, muy abierto y sumamente laxo lo que preocupa, porque después las consecuencias que surjan o pudieran surgir por las interpretaciones de los inversionistas, comprometerán el futuro de los argentinos. Ello es así porque permite que los principios y parámetros que establece puedan complementarse con las normas reglamentarias que se dicten, los pliegos de cada contratación y el contrato final que se celebre en cada caso en particular. También en esto debemos ser cuidadosos porque muchas veces la reglamentación es insuficiente, hecha a medida del "cliente" o no contempla en absoluto el espíritu de la ley. La iniciativa también adopta una definición amplia de PPP, no circunscripta a infraestructura ni a un tipo definido de contrato. Por ejemplo, se incluye la construcción, suministro, mantenimiento, gestión y/u operación de proyectos.

Otro punto a tener en cuenta es el arbitraje, las controversias técnicas y cualquier tipo de disputas que surjan con motivo de contratos de PPP podrán someterse a paneles técnicos y/o a tribunales arbitrales.

Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales nacionales. El texto expresamente excluye la revisión del mérito del laudo arbitral (se asemeja a las sentencias de los juicios, es de carácter obligatorio) por tribunales locales. En la iniciativa no se excluye la posibilidad de que el arbitraje tenga lugar en el exterior. Para evitar la sensación que tienen muchos colegas de "cesión de soberanía" lo mejor es establecer reglas claras de contratación y solución de controversias, ya sea que se diriman en el país o cediendo jurisdicción al exterior.

Los conflictos entre países se arbitran de este modo y los convenios internacionales, el Mercosur, entre otros, prevén el laudo externo como modo de solución alternativa del conflicto sin perjuicio de que si no se llega a arreglo queda subsistente la posibilidad de dar inicio a la acción judicial.

Recuerdo además -porque en ocasiones nos olvidamos lo que nos conviene- que las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, que se construyen en Santa Cruz con capitales chinos tienen prórroga de jurisdicción en Londres, porque era imposible sino lograr el financiamiento. Son las reglas del juego que se imponen a nivel mundial.

Tampoco queda claro lo referente a la subcontratación que pondría en riesgo a la PYMES que, en la mayoría de los casos, son las que aportan capital y trabajo también



#### Dirección de Información Parlamentaria

¿Qué condiciones y seguridad le ofrecemos?

En el inciso u) del artículo 9° se establece que el contratista deberá optar preferentemente por empresas nacionales y/o pymes locales. Sin perjuicio de esta obligación de optar por ellas, no se establece ningún tipo de requisitos a cumplir por las subcontratistas ni límite alguno a la facultad de subcontratar, lo que podría, por ejemplo, devenir en la tercerización completa de la obra o servicio, lo que implicaría que el contratista pueda ser un mero intermediario.

Debe ponerse algún tipo de límite a este tipo de facultad que sea consonante con el resto de la legislación que rige en la materia y la preservación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores y que el Estado debe velar por su cumplimiento.

Conflictiva también es la ausencia de requisitos de publicidad, viéndose afectada la transparencia al no permitir conocer, por ejemplo, quién es el tercero cedido.

Además no puede ser una regla la transferencia de los contratos; sería bueno, propicio, exigible que sea necesario el dictamen previo del procurador del Tesoro de la Nación y de la Auditoría General de la Nación para que se expidan con claridad respecto de si el cedido cumple con idénticos requisitos al contratista y si se encuentran garantizados los derechos de los otros oferentes y del Estado nacional.

Por último, el cuidado del Medio Ambiente, cosa que preocupa al mundo: el artículo 5° de protección al medio ambiente (protección ambiental) es inconstitucional, incorrecto y se contrapone con el actual régimen de responsabilidad ambiental establecido por el derecho ambiental (ley 25.675, artículos 27 a 33 y nuevo Código Civil y Comercial), entre otros.

Según la legislación vigente ambos sectores -el público y el privado-, se encuentran obligados a la protección ambiental, tanto la prevención, la mitigación o la compensación o reparación. Cada uno debe responder de acuerdo a su obrar o accionar. El mencionado artículo viene a dar por tierra la legislación vigente en ese aspecto. El artículo debe establecer que en la estructuración de proyectos de participación público privada se deberá dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos de protección ambiental, conforme la normativa vigente y aplicable.

Conocemos la apertura del oficialismo para incorporar las modificaciones, que son el resultado del trabajo de muchos diputados de todos los espacios políticos para hacer de este proyecto no lo perfecto sino lo posible para nuestro país, que necesita de las inversiones para crecer en pos del desarrollo del pueblo ávido de mejoras en salud, educación, seguridad e infraestructura energética, vial y de transporte.

De aceptarse las modificaciones propuestas, adelanto mi voto positivo.

## **22. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SÁNCHEZ**

### **Contratos de participación público privada.**

El proyecto en consideración enviado por el Poder Ejecutivo nacional -con las modificaciones propuestas por el Senado de la Nación- plantean centralmente la





## Dirección de Información Parlamentaria

aprobación de pautas generales de esta nueva modalidad de contratación del Estado denominada “participación público-privada” (PPP). La principal misión de la PPP se centra en la capacidad de aprovechar la potencialidad de lo que puede ofrecer cada parte del contrato, a partir de la flexibilidad que su conformación permite para establecer las obligaciones de cada parte en razón de las particularidades que pueden surgir en cada caso específico.

Si bien podríamos enfrascarnos en eternas discusiones ideológicas entre quienes quieren mayor participación estatal y quienes pretenden mayor participación privada en el desarrollo de emprendimientos que tengan vinculación con el interés público, existe hoy un consenso prácticamente unánime de que el Estado debe gestionar enteramente ciertos servicios esenciales como la justicia, la representación diplomática y la defensa; en tanto existe un amplio espectro de prestaciones que deben ser garantizadas por el Estado, y que, con diversos grados de participación, se pueden llevar adelante con alguna intervención o coparticipación de agentes privados.

Efectivamente, el modo en que se determina dicha interacción puede resolverse con las distintas modalidades de contratación, siempre y cuando el Estado reserve para sí con carácter indelegable las funciones de regulación y control.

Es por ello que compartimos el diagnóstico que el gobierno plantea al presentarnos esta iniciativa en el sentido que el andamiaje jurídico existente, con normas referentes a la obra pública de los años 40 y 50, se encuentra desactualizado para responder a las dinámicas actuales de interacción entre los agentes públicos y privados, y que por lo tanto, la incorporación de esta nueva modalidad de contratación, que se desarrolla con éxito en gran parte de América Latina, puede resultar de gran utilidad para nuestro país.

No obstante ello, no puede soslayarse el hecho que los regímenes de participación público-privada generan un nivel de interrelación entre las partes que, sin los resguardos pertinentes, resulta potencialmente de gran vulnerabilidad en materia de connivencia y corrupción por parte de los funcionarios públicos encargados de llevar adelante negociaciones de contratos sumamente onerosos e importantes para el interés público por su impacto en el bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, la relación histórica de nuestro país entre lo público-privado, particularmente en torno a la obra pública, está marcado por el incumplimiento de ambas partes del contrato, en violación de los principios generales que establece la ley. Los 12 años de extrema corrupción que existió en el gobierno anterior no hicieron más que exacerbar este mal de características cuasi endémicas del sistema.

Es más, veíamos cómo generalmente la configuración de los pliegos de licitación estaba pensada para ser incumplida, siendo que las infaltables redeterminaciones de precio resultaban en un mayor beneficio para el contratista. Ante la inexistencia de parámetros objetivos de comparación, una inflación galopante, un palmario estado de desorden administrativo y excepciones constantes, la connivencia entre funcionarios corruptos ávidos de prebendas y contratistas inescrupulosos en busca de retornos de inversiones a tasas chinas se encontraban a la orden del día.

Por lo tanto, el eje central de cualquier reforma del sistema de contrataciones del Estado debe girar en torno a la transparencia, y preferentemente dotarlo de un control ciudadano efectivo, que en definitiva son quienes deben usufructuar los beneficios de las obras impulsadas por el Estado.

Las reformas propuestas por esta Cámara a la sanción proveniente del Senado van en



#### Dirección de Información Parlamentaria

esta línea. Vemos que se ha incorporado:

- La obligación de informar al congreso el impacto fiscal de los proyectos de PPP, con controles de la SIGEN y la AGN;
- La mayor claridad en la necesidad de delimitación de las obligaciones de las partes en los contratos que se celebren;
- La intervención previa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable por el potencial impacto ambiental;
- La necesidad de establecer parámetros mensurables en los pliegos de los contratos;
- La obligación de que en caso de cesión de contrato el cesionario reúna los mismos requisitos que el cedente;
- Se elimina la posibilidad de que quienes asesoren previamente en la elaboración del proyecto sean posteriormente contratistas;
- Se agrega como causal de inhabilidad para contratar el hecho de ser deudor de la AFIP por sentencia administrativa o judicial en firme;
- Se establece la creación de una página web de la Unidad de PPP, que debe tener toda la información relacionada con los contratos publicada en dicha página, como así también el alcance de la ley de acceso a la información pública;
- La obligación de la Unidad de PPP de publicar todos los informes referentes a una contratación 30 días previos a la licitación o concurso público, y
- La creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de PPP.

A todo ello debe agregarse que el Senado estableció la misión de la Auditoría General de la Nación de auditar todos los contratos de PPP anualmente.

Como puede observarse, el trabajo desarrollado en las comisiones ha incrementado notablemente los controles institucionales de esta nueva forma de contratación. No obstante ello, sigue siendo de fundamental importancia la honestidad, probidad y la profesionalidad del funcionario público a cargo de llevar adelante el contrato de participación público-privada. La Comisión Bicameral que crea esta norma tiene como uno de sus principales deberes velar por que así sea.

Por otra parte, considero que debe ser prioridad de este gobierno como del Parlamento abocarse al tratamiento de una ley integral de transparencia en la obra pública, que por supuesto incluya los contratos de PPP.

Dicha reforma resulta nodal para que no se repitan los indignantes niveles de corrupción que sistemáticamente denunciábamos durante el gobierno pasado y garantizar que no solo los pliegos, sino que todo el proceso licitatorio y la evolución del contrato, sean accesibles a todos los ciudadanos. Asimismo es imperioso que se establezca un mecanismo de participación ciudadana y/o de seguimiento de los órganos de control en materia de transparencia. En particular, en ocasión del diálogo competitivo entre las partes que propicia el artículo 14 de la ley de PPP. No podemos perder más tiempo. Es una deuda pendiente que nos urge.

En conclusión, el régimen de contratación público-privado es una herramienta que puede resultar sumamente útil para encarar los serios desafíos que tiene este gobierno en materia de infraestructura, hoy terriblemente deteriorada. No obstante ello, no deben por esto dejarse de lado los mecanismos de control, que son necesarios para cumplir con los cambios que la sociedad ha exigido a la clase política luego de las recientes elecciones presidenciales.



## 26. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SPINOZZI

### **Contratos de participación público privada.**

Nuestra legislación vigente en materia de contratos de participación público privada es muy escueta y solo da un marco restringido y fragmentado para el tratamiento de esta nueva modalidad de cooperación entre ambos sectores. Todo tipo de articulación que en dicho sentido se quiera llevar adelante, surgirá del juego que se haga de las leyes 17.520 concesión de obra pública, 13.064 contrato de obra pública y 23.696 emergencia administrativa, y de los decretos 967/05 Régimen Nacional de Asociación Público Privada, 966/05 Régimen Nacional de Iniciativa Privada y 1.023/01 régimen general de contrataciones públicas y de obra pública. De la complementación entre las citadas normas, surgen pues los vagos y restrictivos lineamientos a partir de los cuales hoy el Estado y el sector privado interactúan para llevar en conjunto el desarrollo de obras públicas y la prestación de determinados servicios. Esta realidad nos conduce, indefectiblemente, a la necesidad de elaborar una norma integral y específica que le permita a nuestro país contar con los lineamientos necesarios para que la contratación entre el sector público y el privado se convierta en una herramienta para el desarrollo de obras que Argentina demanda y en las que primen las reglas claras y la seguridad jurídica de las partes involucradas. Eso es, señor presidente, lo que en este momento nos convoca a reunirnos y debatir dentro de este recinto.

Los contratos de participación público privada, tal como su nombre lo indica, plantean la posibilidad de que el Estado y los particulares establezcan mecanismos de cooperación en virtud de los cuales estos últimos desarrollan, edifican, construyen, refaccionan y/o llevan adelante tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura pública, como así también la prestación de un servicio que por regla general suele ser brindado por la administración.

Los contratos de participación público privada, o PPP como se los suele denominar, brindan la posibilidad de que el Estado y los particulares interactúen de manera flexible y dinámica, potenciando las capacidades específicas de cada uno de dichos sectores en pos de optimizar los resultados y la obtención de ventajas que en el mediano y largo plazo impactarán de manera positiva en el bienestar de la sociedad. A través de las PPP cada quien lleva adelante las tareas en las que es experto sin que se genere la yuxtaposición de funciones que en la mayoría de los casos implica ineficiencia y el dispendio inoficioso de los escasos recursos fiscales.

Lo novedoso de las PPP es que gracias a ellas se produce un cambio de paradigma en virtud del cual se deja de lado la dicotomía actual del Estado concedente y el particular contratista, por un esquema que plantea la colaboración entre ambos sectores.

Los contratos de PPP generan varias ventajas. A continuación haré una breve mención de algunas de ellas que espero sirvan para aclarar a quienes aún no se hubieran decidido por acompañar el presente proyecto de ley.

En primer lugar, las PPP ponen en cabeza de cada sector, es decir Estado y particular, la distribución de riesgos según corresponda de acuerdo a la capacidad y la



#### Dirección de Información Parlamentaria

responsabilidad de cada uno.

En segundo término, las PPP reducen la presión financiera sobre las arcas públicas ya que estimulan la financiación por parte del sector privado.

Otra de las ventajas de las PPP es la incorporación de nuevos conocimientos, ya que el sector privado tiene mayor experiencia, por estar más especializado, en el manejo de costos, el diseño y la operación de un proyecto.

En relación al plazo de construcción y entrega finalizada de un proyecto determinado, las PPP también generan ventajas. Ello es así puesto que el particular, por lo general, comienza a recibir su remuneración cuando termina la obra de acuerdo a los parámetros de calidad acordados. De ese modo, siempre va a haber incentivos para que los proyectos sean entregados en el tiempo y formas acordados y de manera ajustada a lo inicialmente presupuestado.

Las PPP generan un impulso en la economía local y activan no solo a los sectores industriales asociados a la obra pública, sino que además promueven la reactivación de todos los segmentos de la economía.

En base a lo anteriormente expuesto, las PPP hacen que los recursos fiscales sean destinados a tareas que le resultan más específicas y urgentes al tiempo que se estimula la inversión directa privada, tanto nacional como extranjera, para el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos de manera eficiente.

En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, manifiesto mi total apoyo al presente proyecto de ley e invito al resto de mis pares a que obre en el mismo sentido.

## **27. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA TERADA**

### **Contratos de participación público privada.**

Mucho se ha dicho y hemos escuchado sobre este proyecto de Ley de Participación Pública y Privada y la realidad es que este tipo de contratación va a ser una alternativa a los métodos ya existentes en nuestra legislación.

La incorporación de este fenómeno no es casual. Aparece en escena cuando los requerimientos de obra de infraestructura y servicios no pueden ser acompañados por el propio Estado, sea éste provincial, municipal o nacional.

Cuando la comunidad necesita determinadas obras que no pueden ser soportadas por el Estado ni solventadas con más impuestos, es aquí donde debemos hacer foco para poder ver con claridad la necesidad de aprobar este proyecto.

Existe amplio consenso en el mundo sobre los beneficios que trae aparejada la aplicación de estos acuerdos, principalmente seguridad y transparencia de la gestión.

Hemos escuchado decir que esto es una privatización. Esto no es privatizar. Justamente estamos hablando de una participación mixta que permitirá llevar a cabo la obra y a su vez contará con el control por parte del Estado, de la comisión bicameral y de la Unidad de Participación Público Privada. Estamos hablando de tres organismos distintos e independientes unos de otros.

Asimismo, el Estado no se desprende de la actividad. Por el contrario, la concesiona y

## Dirección de Información Parlamentaria

controla. Estamos legislando para no perder ese control. No queremos y no avalamos la privatización de los servicios y de las obras.

Este proyecto se basa en tres pilares. En primer término, la cooperación basada en la experiencia de cada socio o parte: poder plantear una obra de infraestructura y a su vez tener en cuenta la experiencia real de los potenciales realizadores, brinda confianza y seguridad.

En segundo lugar, la satisfacción de necesidades públicas bien definidas. Cada una de las necesidades a cubrir serán evaluadas en cuanto a quién deberán adjudicarse. Podría hacerlo el propio Estado, un privado nacional o un privado internacional en colaboración con el Estado nacional.

Finalmente, la distribución del riesgo. Este es un punto importante, ya que los que podrían estar vinculados con el proceso de realización de la obra o servicio identificarán los riesgos en forma previa a la realización, lo que permitirá también evaluar cuál es el oferente más idóneo para la tarea.

En estos tres pilares está plasmada la transparencia que buscamos cuando hablamos de obra pública.

También, identificar la necesidad pública y ser conscientes -y hacer consciente a la comunidad- de la falta de recursos para llevarla adelante transparente la gestión pública. No tenemos hoy capacidad real para hacer frente a las obras que aún están pendientes. Hablo de mi provincia. Nosotros todavía no tenemos el gasoducto del NEA, que desde 2008 se lanzó y se iba a terminar en 2012 y después en 2014. Lo mismo nos pasa con el segundo puente Chaco-Corrientes, postergado desde hace más de veinte años -se proyectó en 1992- y reflotado luego por una promesa del ex gobierno, que se comprometió a terminarlo en el 2008.

Estoy mencionando dos obras de gran importancia que son sumamente necesarias en la provincia del Chaco y en el NEA. Hablamos de megaobras cuya puesta en marcha significará trabajo y prosperidad para el nordeste.

Así como menciono éstas obras, seguramente mis colegas podrán mencionar otras en sus provincias que aún están pendientes no sólo por todo lo que hemos visto y escuchado de la obra pública en éstos últimos 10 años, sino también porque está comprobado que se necesita evaluar los riesgos y las inversiones para realizar y terminar las obras. Hablamos, de autopistas, puertos, trenes, puentes y túneles.

No podemos seguir lanzando licitaciones que no empiezan o que no terminan y nadie controla. Ese modelo se tiene que agotar. Necesitamos ejercer el control sobre la obra pública, concesionada o no.

Haciendo un poco de historia, si visitan la página del Corredor Bioceánico Aconcagua podrán ver que cómo el proyecto que había sido declarado de interés público no pudo ser llevado a cabo por no poder contar con una herramienta como la que hoy ponemos en discusión. Se había constituido como un proyecto de riesgo ciento por ciento privado, ya que ninguno de los dos gobiernos tenía que realizar inversiones o presentar garantías. Solo debían facilitar la infraestructura existente del ferrocarril, los permisos para que pueda circular y una concesión de veinticinco años para amortizar la inversión inicial de la empresa que ganara la licitación.

Pese a las dudas de expertos en ferrocarriles, economistas e ingenieros y tras postergaciones, en septiembre de 2004 los gobiernos de ambos países aseguraron que licitarían la reconstrucción y posterior explotación del Ferrocarril Trasandino Central.



#### Dirección de Información Parlamentaria

En marzo de 2005 el gobierno nacional argentino decidió que el Proyecto del Ferrocarril Trasandino Sur no era de su prioridad y anunció que ya estaba firmado el decreto para llamar a licitación para reconstruir el Ferrocarril Trasandino Central, de acuerdo con el proyecto presentado por la empresa Tecnicagua.

Después de casi tres años y varias postergaciones desde el anuncio del decreto para llamar a licitación, el 31 de enero de 2008, el proceso fue declarado desierto. La única oferta recibida había sido la de Tecnicagua y no se adecuaba a los requerimientos técnicos.

Contamos con los antecedentes de otros países latinoamericanos, como Chile, Perú, Uruguay y Colombia, que ya lo han utilizado de manera fructífera.

Es una herramienta que, insisto, viene a sumar y no a reemplazar a otra de las existentes.

No quiero explayarme mucho más sobre todo lo que ya se ha dicho, pero no quiero dejar de mencionar que este proyecto también habla de trabajo y crecimiento. También es una herramienta más para construir la nueva Argentina.

Los artículos 12 a 14 del proyecto promueven y protegen el trabajo y la empresa nacional por sobre otros. Se imponen controles, informes y auditorias, entre otras cosas para garantizar los derechos laborales y de empresa de nuestros compatriotas.

Creemos desde el interbloque que esta es una herramienta necesaria para construir nuevos caminos prósperos y dejar atrás a la Argentina postergada. Queremos darles a los argentinos y argentinas una mejor calidad de vida. Tenemos que darnos la oportunidad de combatir el miedo a la participación mixta confiando en que todos los gobiernos pueden ser auditados. Tenemos que dar inicio a la etapa de la transparencia. Por lo expuesto, desde el bloque de la Coalición Cívica-ARI vamos a acompañar el proyecto.

## 29. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA TUNDIS

### **Contratos de participación público privada.**

En esta oportunidad quiero referirme a la gran importancia que debe tener el proyecto de ley a considerar, sobre los contratos de participación pública y privada.

Como sabemos y creo que resulta claro, la Argentina se encuentra en un momento donde la gran infraestructura que tiene se encuentra deteriorada. Ello nos lleva a que este factor -uno de los principales, diría yo- cause una deficiencia a la hora de poder competir contra otros países. Por eso es necesario captar grandes inversiones para mejorar cada día esta problemática.

Estimo pertinente que una de las maneras de lograrlo, ya existente, pero que necesita ser mejorada, es el tratamiento del régimen de participación pública y privada, la que se encuentra vigente a nivel nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El régimen de participación pública y privada, bien implementado, puede servirnos para realizar grandes inversiones en momentos de restricciones fiscales acuciantes. El mismo es muy útil, pero también se deben acotar al máximo posible los riesgos intrínsecos y

#### Dirección de Información Parlamentaria

funcionar de una manera más autónoma.

Se confía en que a través de esta medida se propicie la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo de una actividad económica sustentable que fomente el pleno empleo. Es un gran instrumento que facilita la concreción de políticas públicas.

Me resulta lógico que la Cámara de Senadores haya remitido una propuesta nueva con más de veinte cambios, ya que sus falencias eran bastante graves y sus elementos incompatibles. El objeto era muy amplio, los controles muy laxos y existía una prórroga de jurisdicción.

Creo pertinente la inclusión de un párrafo en el artículo 2°, ya que apunta a evitar la creación de servicios públicos “paralelos” no sujetos a los marcos normativos vigentes. También estimo pertinente la creación de una comisión bicameral para el seguimiento de los proyectos referidos a la participación pública y privada y que los contratos deban poseer los suficientes contenidos técnicos mínimos y los indicadores con los que se los monitoreará.

Con respecto a la contratación directa, tanto todo el Frente Renovador-UNA como yo no aceptamos agregarla a este proyecto de ley. Se solicitaba por más de 10 mil millones de pesos y beneficiaría a amigos o familiares, sin darle la posibilidad de que puedan presentarse otras empresas con mayores beneficios o menores presupuestos. De haberlo aceptado se daría la posibilidad de presentarse más casos como los que ya hemos pasado.

Nuestro trabajo es proteger a los ciudadanos de nuestro país, generar empleo y sacarlo adelante. Debemos protegerlos cuidando la legislación y manteniéndola actualizada para que no se vuelvan a cometer antiguos errores. Creo que al tratar este proyecto estamos haciendo eso mismo.

Por las razones expuestas, mi voto respecto de este proyecto es afirmativo, con las correspondientes modificaciones que mi partido y yo creemos pertinentes.